

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

APELACIÓN - SENTENCIA	
DEMANDANTE	RAMÓN EMILIO ACEVEDO CARDONA
DEMANDADOS	COLPENSIONES- COLFONDOS - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO- UGPP
RADICADO	05001-31-05-012-2019-00756-01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	Ineficacia del acto de traslado de régimen pensional- Pensión de vejez
DECISIÓN	Revoca, Adiciona y Confirma

Medellín, seis (06) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los magistrados ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA, LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL y como ponente MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, en acatamiento de lo previsto por el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, y surtido el traslado correspondiente, procede a proferir sentencia ordinaria de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por el señor **RAMÓN EMILIO ACEVEDO CARDONA** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**, la **AFP COLFONDOS S.A.**, el **MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO-** y la **UNIDAD DE GESTIÓN DE PENSIONES Y PARAFISCALES – UGPP**

Después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 053**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I. – ASUNTO

Es materia de la Litis, decidir los recursos de apelación interpuestos por el apoderado judicial de la parte demandante y el apoderado de COLPENSIONES contra la sentencia que profirió el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, en la audiencia pública celebrada el día 07 de octubre de 2022; y a su vez conocer dicha sentencia en Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de Colpensiones, de conformidad al artículo 69 del CPT y SS.

II. – HECHOS DE LA DEMANDA

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis, que el demandante nació el 07 de enero de 1957, y que ha laborado para el sector público y privado. Que ha realizado aportes en pensiones al régimen de prima media con prestación definida administrado por CAJANAL y el ISS hoy COLPENSIONES, desde 1983 al 14 de septiembre de 1994; y posteriormente se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad a través de la AFP COLFONDOS el 24 de octubre de 1994, fondo privado donde se encuentra afiliado en la actualidad.

Se dijo que el demandante entre 1994 a 1997 estuvo afiliado y haciendo aportes al mismo tiempo para el ISS y para la AFP COLFONDOS.

Se afirmó que en la historia laboral de COLFONDOS solo se acreditan 1.369 semanas de las cuales 1.216 son las que ha cotizado a la AFP COLFONDOS y apenas 152 son de origen de bono pensional.

Se expresó que antes del 7 de enero de 2009 la AFP COLFONDOS no realizó reasesoría ni informó por escrito al demandante que esa era su última y única oportunidad para retornar al régimen de prima media ya que le faltaban más de 10 años para cumplir la edad (62) años para tener derecho a la pensión de vejez en el RPM.

Se manifestó que el demandante tiene tiempos, cotizaciones y salarios simultáneos, trabajó y cotizó desde el año 1983 hasta el 31 de julio de 2019, por más de 36 años, para un total de 1.836 semanas.

Se aseguró que el actor presentó derecho de petición ante Colpensiones solicitando el traslado de régimen pensional, y a su vez, solicitó el reconocimiento de la pensión, sin embargo, la solicitud no ha sido contestada.

Se duele que los asesores ejecutivos del RAIS no le brindaron la información suficiente para haber tomado la decisión pertinente con la información determinante y ajustada a su situación concreta; y que, al contrario, le ocultaron información relevante al momento de ser atendido para afiliarse a las AFP demandadas, por lo que considera que su decisión se encuentra viciada y afectada en su validez, por ausencia del conocimiento sobre las consecuencias jurídicas de su traslado de régimen pensional.

III. – PRETENSIONES

La acción judicial está dirigida a que se declare la ineficacia del traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad adelantado por la AFP demandada y que en consecuencia, se ordene a COLFONDOS, trasladar a COLPENSIONES, el valor de los aportes recibidos con motivo de la afiliación del demandante a esa administradora, incluido los rendimientos financieros, debiendo ordenar a esta última entidad recibir dichas sumas y aceptar al demandante en el régimen de prima media con prestación definida sin solución de continuidad.

Consecuencialmente se solicita CONDENAR a COLPENSIONES reconocer y pagar al demandante, **i)** la pensión vitalicia de vejez, teniendo en cuenta las cotizaciones y tiempos que tiene en el RPM (ISS y CAJANAL) y en COLFONDOS. Dicho reconocimiento se pide a partir del cumplimiento de los requisitos de los 62 años (7 de enero de 2019) y de las semanas de cotización o desde la fecha de retiro definitivo del servicio o sistema 31 de julio de 2019. **ii)** Además, se pide que se reconozcan las mesadas adicionales legales

correspondientes a junio y diciembre, **iii)** al igual que se reconozca la indexación de las mesadas dejadas de percibir, **iv)** lo ultra o extrapetita que resultare probado, **v)** se condene a COLFONDOS a reconocer y pagar costas del proceso.

IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA

COLPENSIONES, a través de la contestación allegada (PDF 02 del expediente digital), se opuso a la prosperidad de las pretensiones de esta acción; negó los hechos de la demanda, y; propuso las excepciones perentorias que denominó: *“INEXISTENCIA DE LA INEFICACIA EN EL TRASLADO DE RÉGIMEN, DEVOLUCIÓN DE APORTES DEBIDAMENTE INDEXADOS, BUENA FE DE COLPENSIONES, PRESCRIPCIÓN, COMPENSACIÓN, IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS”*

Por su parte la AFP COLFONDOS, se allanó a las pretensiones de la demanda, conforme a la previsión del artículo 98 del C.G.P. (PDF 4)

El Despacho de primera instancia dispuso la vinculación del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y de la UNIDAD DE GESTIÓN DE PENSIONES Y PARAFISCALES – UGPP

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO La entidad en escrito visible en el PDF 22, se opuso a todas y cada una de las pretensiones en contra de esa cartera ministerial, precisando que la Oficina de Bonos Pensionales responde únicamente por la liquidación, emisión, expedición, redención, pago o anulación de bonos pensionales o cupones de bonos pensionales a cargo de la Nación, procedimientos que se efectúan con base en las solicitudes que al respecto realicen las Administradoras del Sistema General de Pensiones.

Se adujo que la entidad desconoce las circunstancias en que se produjo el traslado del demandante del Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPMPD) al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) y, por consiguiente, desconoce las asesorías realizadas con la AFP Colfondos S.A. al señor Acevedo Cardona. Las afiliaciones y/o traslados de las personas entre los regímenes pensionales creados por la Ley 100/93 lo determinan por mandato

legal las AFP'S, sin que la Oficina de Bonos Pensionales (OBP) tenga injerencia alguna en la decisión que al respecto adopten los interesados en pertenecer o bien al RPM o en su defecto, al RAIS.

Agregó además que el señor Acevedo Cardona se afilió al RAIS, administrado por la AFP Colfondos desde el 24 de octubre de 1994, administradora a la cual se encuentra actualmente afiliado; como consecuencia de lo anterior, tiene derecho a que se emita en nombre suyo un Bono pensional tipo A modalidad 2 por haberse trasladado al Régimen de Ahorro Individual con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 y tener una historia laboral de cotización al ISS o a cajas públicas superior a 150 semanas. El Bono Pensional tipo A modalidad 2 al que tiene derecho el demandante, de acuerdo con la liquidación provisional del Bono Pensional generada por el sistema interactivo en respuesta a la petición ingresada por la AFP Colfondos el día 14 de marzo de 2019, concurriría como emisor y único contribuyente la Nación.

Finiquitó afirmando que, de conformidad con la normatividad vigente en la materia, la Emisión y Redención (Pago) del Bono Pensional Tipo "A" del señor Acevedo Cardona solo tendrá lugar en derecho, cuando la AFP Colfondos la solicite al Emisor La Nación, autorizada por su afiliado mediante la aprobación de la Liquidación Provisional que la AFP le presente, con base en la historia laboral correcta y completa, procedimiento que hasta el día de hoy (17 de junio de 2022), no ha tenido ocurrencia.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, planteó a título de excepciones: *"FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA RESPECTO DE LA PARTE PASIVA DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, LISTISCONSORCIO NECESARIO, BUENA FE"*

La UNIDAD DE GESTIÓN DE PENSIONES Y PARAFISCALES – UGPP,
en escrito que consta en el PDF 25, se opuso a la totalidad de las pretensiones y planteó a título de excepciones: *"FALTA DE LEGITIMIDAD EN LA CAUSA POR PASIVA, INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, PRESCRIPCIÓN, IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS"*

V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

En audiencia pública celebrada el 07 de octubre de 2022, la Juez de conocimiento accedió a las pretensiones de la demanda declarando la ineficacia de la afiliación del señor RAMÓN EMILIO ACEVEDO CARDONA, al régimen de ahorro individual con solidaridad en el marco de la afiliación adelantada por COLFONDOS S.A.

Se condenó a COLFONDOS a que, traslade con destino a COLPENSIONES, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, el valor de la cuenta de ahorro individual con los respectivos rendimientos financieros del señor RAMÓN EMILIO ACEVEDO CARDONA, de igual modo, el porcentaje correspondiente a los gastos de administración, las primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados. A la par se dispone que, al momento de cumplir la orden, los conceptos aparezcan discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifique.

Se ORDENA a COLPENSIONES, reactivar la afiliación del demandante sin solución de continuidad, y recibir los mencionados valores que sean trasladados por la COLFONDOS e integrarlos al fondo común que administra, y que las semanas acreditadas se reflejen en su historia laboral.

CONDENÓ a COLPENSIONES, a reconocer y pagar al señor RAMÓN EMILIO ACEVEDO CARDONA, la pensión de vejez bajo los lineamientos de la Ley 797 de 2003. Advirtiéndose que quedará en cabeza de COLPENSIONES realizar la correspondiente liquidación conforme lo establecen los arts. 21 y 34 de la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta para ello, la última fecha de cotización que certifique y la corrección de la historia laboral a que haya lugar.

AUTORIZÓ a COLPENSIONES para que del retroactivo que se genere al demandante se le descuente los aportes en salud con destinado al sistema

general de seguridad social en salud, que serán consignados en la cuenta del ADRES.

DECLARÓ infundadas las excepciones de PRESCRIPCIÓN y COMPENSACIÓN y DECLARÓ probada la excepción de FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA propuesta por MINISTERIO DE HACIENDA y la UGPP.

No se impuso condena en costas a las demandadas.

El principal argumento de la A quo para declarar la ineficacia, fue la tesis jurisprudencial que en la actualidad sostiene la sala de casación de la Corte Suprema de Justicia, sobre la inversión de la carga de la prueba, la insuficiencia del formulario para acreditar asesoría, la relevancia de la oportunidad en que se reciba la asesoría, la imposibilidad de que la ineficacia se sanee por prescripción o por traslados en el mismo régimen de ahorro individual con solidaridad y el derecho a la libre selección de régimen pensional.

En relación con la prestación económica encontró la A quo configurados los requisitos legales para el reconocimiento pensional, bajo los presupuestos y exigencias de la Ley 100 de 1993 con las modificaciones de la Ley 797 de 2003, a efecto de lo cual, luego de verificar que el demandante nació el 17 de enero de 1957-sic¹, y que en la actualidad cuenta con 65 años de edad y más de 1.760 semanas cotizadas, de las cuales 544 cotizó en CAJANAL y el ISS y 1.216,86 semanas en COLFONDOS.

Resaltó la A quo, que en el caso en concreto no se puede emitir una condena en concreto en relación con la prestación económica de pensión, teniendo en cuenta que el bono pensional presenta inconsistencias y debe ser corregido por Colpensiones y por cuanto además, no se tiene claridad de la fecha de retiro del demandante del sistema pensional, pues en la demanda se expresa que el actor dejó de realizar cotizaciones en julio de 2019, no obstante la historia laboral

¹ Fecha de nacimiento del demandante 7 de enero de 1957

adjunta al expediente emitida por COLFONDOS, el 9 de mayo de 2019, da cuenta que el actor solo hizo cotizaciones hasta ese mismo mes y año.

Por esa razón, ordenó la juez de instancia que quedará en cabeza de COLPENSIONES realizar la liquidación de la pensión del demandante atendiendo a lo previsto en los artículos 21 y 24 de la ley 100 de 1993, resaltando a su vez, que al momento en que reciba los valores y la actualización de la historia laboral, podría presentarse un incremento de las semanas, lo que daría lugar a corregir la historia laboral.

La A quo *-pese a no haber sido solicitado por la parte actora-* negó los intereses moratorios a que se refiere el artículo 141 de la ley 100 de 1993, aduciendo que COLPENSIONES se no encuentra en mora de reconocer la prestación económica, pues es solo a partir de esta sentencia que se reconoce y ordena el pago de la pensión a favor del demandante.

También, se abstuvo la A quo de imponer costas procesales a cargo de la AFP COLFONDOS, aduciendo que la entidad se allanó a las pretensiones de la demanda.

Proferida la sentencia de primera instancia, la apoderada de la parte demandante solicitó **aclaración** de la misma señalando que durante la lectura de la sentencia se indicó de manera errónea el número de cédula y la fecha de nacimiento del demandante.

En relación con lo anterior, la A quo, precisó que el número de cédula del demandante es: 4.350.874 y su fecha de nacimiento es el 07 de enero de 1957.

Igualmente, la apoderada judicial de la parte actora, pidió **complementación** de la sentencia, afirmando que la juez de instancia, omitió pronunciarse en lo atinente a la indexación de las mesadas dejadas de percibir, pretensión invocada desde el escrito de demanda.

En punto de la solicitud de complementación, la Juez, negó el pedimento argumentando que en la fijación del litigio se dijo que en el asunto se iba a

enjuiciar si era procedente los intereses moratorios, más no se hizo alusión a la indexación.

VI. – RECURSO DE APELACIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La sentencia de primera instancia fue apelada por los apoderados judiciales de la parte demandante y el apoderado de COLPENSIONES.

Apelación parte demandante: Recurrió la parte actora dos aspectos de la sentencia: El primero de ellos se refiere a que si bien se concedió la pensión al demandante, la juez de primera instancia omitió pronunciarse en torno a la pretensión de indexación de las mesadas dejada de percibir; y el segundo aspecto, concierne a que la A quo absolvió a la AFP COLFONDOS, de la condena en costas procesales, por haberse allanado a las pretensiones, sin embargo, asevera la parte, que el abogado de la AFP requería tener facultad expresa en el poder para allanarse de acuerdo al artículo 99 del C.G.P., lo cual se echa de menos en el poder que obra en el expediente, destacando del mismo modo que, el demandante ha esperado por más de cuatro años para que se haga efectiva la ineficacia del traslado, luego de haber presentado un sin número de derechos de petición ante la entidad, sin haber obtenido respuesta alguna.

Apelación de Colpensiones: El apoderado judicial solicita que se revoque la orden de reconocimiento de pensión de vejez, teniendo en cuenta que Colpensiones no cuenta con los recursos y cotizaciones que eventualmente harían parte de la mesada pensional del demandante, pues destaca que es a partir de esta sentencia, que se está ordenando retornar al actor al RPM.

Aseveró asimismo que la decisión de instancia afecta el principio de sostenibilidad financiera de Colpensiones, más aún cuando la sentencia de primera instancia aún no se encuentra en firme o ejecutoriada.

Alegatos de Conclusión:

A la doctora DANIELA ECHEVERRY GARCIA, portadora de la tarjeta profesional No. 275.505, se le reconoce personería para representar a

COLPENSIONES. La apoderada judicial de **COLPENSIONES**, a través del escrito de alegatos de conclusión solicita que se revoque el fallo de primera instancia por cuanto el señor RAMON EMILIO ACEVEDO CARDONA se trasladó al RAIS, a través de formulario de vinculación de manera libre, espontánea y sin presiones tal y como lo hace constar el accionante al imponer su firma en la casilla correspondiente dentro del formulario de afiliación y como lo expresa dentro del interrogatorio de parte. Para la fecha del traslado, el deber de información que tenían las administradoras de pensiones se encontraba en marcado en bajo los parámetros establecidos en el Decreto 663 de 1993, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el cual en el numeral 1° del artículo 97, que estableció la obligación de las entidades de suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio, claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado.

Imploró que, si ha de confirmarse la decisión de la A quo, se ordene la devolución de la totalidad de las sumas que se encuentren depositados en la cuenta de ahorro individual, los rendimientos que se hubieren generado, los descuentos efectuados por garantía de pensión mínima, cuotas para el cubrimiento de los seguros previsionales de invalidez y sobreviviente junto con sus cuotas de administración, primas de reaseguros de Fogafín, de manera indexados. Lo anterior en atención que es indudable la pérdida del valor adquisitivo de la moneda colombiana con el paso del tiempo, y se debe garantizar el financiamiento de la futura pensión al demandante, y tales conceptos no dan lugar a compensarse, con los rendimientos financieros, pues estos no hacen parte del fondo sino del demandante y entrarían acrecentar los aportes del fondo de naturaleza pública que administra la entidad, esto en atención a recientes postulado de la Honorable Corte Suprema de Justicia Sala de Casación laboral SL 3202-2021, SL 2769-2021, SL3708-2021, SL 3710-2021- SL 3706-2021, SL 3571-2021 y SL 3709-2021.

Por su parte, el apoderado judicial de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES- UGPP**, solicita que se confirme la sentencia absolutoria frente a la entidad, pues el fallo dictado analizó a cabalidad

la prueba obrante en el proceso, concluyendo que no era posible condenar a la UGPP, pues a la fecha es jurídicamente inviable el regreso del señor RAMON EMILIO ACEVEDO CARDONA a CAJANAL, y en consecuencia dicha afiliación estaba en cabeza de COLPENSIONES como administradora del régimen de prima media.

De otro lado, la apoderada judicial del **demandante**, llamó la atención de este colegiado señalando que pese a que la A quo declaró que el demandante tiene derecho a que se le reconozca y pague la pensión de vejez, negó los intereses moratorios, los cuales, ni se petitionaron ni quedaron consignados en la fijación del litigio, ni quedaron consignados en el acta de la parte resolutive de la sentencia; al igual, que no se pronunció sobre la pretensión de indexación, la cual se negó en la sentencia complementaria, pese a que fueron solicitados dentro de las pretensiones de la demanda.

Resaltó la togada que la indexación de la primera mesada pensional es un derecho consagrado expresamente en el artículo 53 de la Constitución Política de 1991; es el mecanismo que se utiliza para revalorizar las obligaciones pensionales, con el ánimo de traer a valor presente las sumas que por el transcurso del tiempo han perdido poder adquisitivo, reiterando que la indexación no es una penalización ni un castigo, sino una compensación de los efectos de la inflación sobre el poder adquisitivo del dinero, desconociendo la Jueza de primera instancia los numerosos precedentes Jurisprudenciales y Doctrinales que al respecto de este tema se han dado.

En cuanto al otro aspecto objeto de apelación, recalcó que la condena en costas a la AFP COLFONDOS, es simplemente una carga que constituye una consecuencia procesal impuesta a quien termina siendo vencido en la contienda judicial, conforme a lo estipulado en el artículo 365 del Código General del Proceso, la cual en este evento debe ser ejemplarizante y proporcional al valor total de la condena, pues debe tenerse en cuenta la actitud de la AFP demandada, máxime que se escudan y amparan allanándose a la demanda para no ser condenados en costas.

El apoderado judicial del **MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO** implora que se confirme la sentencia de primera instancia, por encontrarse ajustada a derecho y a la jurisprudencia aplicable, resaltando que la entidad no tiene competencia alguna para decidir sobre solicitudes de reconocimientos y pago de derechos pensionales de sus afiliados, ni es competente para determinar la afiliación y/o traslado de las personas entre los regímenes pensionales.

Teniendo en cuenta la anterior crónica procesal, se pasa a resolver de fondo, previas las siguientes

VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica procesal, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

Naturaleza jurídica de la pretensión. - La Ineficacia en el traslado de régimen pensional-Pensión de Vejez -

El objeto central de esta Litis, se extiende a los puntos objeto de inconformismo planteados por la apoderada judicial de la parte demandante y el apoderado judicial de COLPENSIONES en sus recursos de apelación, sin embargo, esta Sala se encuentra facultada para revisar todos los aspectos de la condena a Colpensiones relacionada con la declarada ineficacia de traslado de régimen pensional y la aceptación del demandante en el régimen de prima media con prestación definida que administra, así como, lo dispuesto respecto a la pensión de vejez, en virtud de la competencia de que se dispone conforme al artículo 69 del CPT y SS., en Grado Jurisdiccional de Consulta.

Partirá la Sala de establecer si el traslado del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad, que realizó el demandante, a través de la AFP COLFONDOS alcanzó o no a producir los efectos jurídicos respectivos.

Sea lo primero referir que la libre escogencia de régimen pensional y el traslado entre regímenes que en tal virtud se efectúe, tiene como presupuesto esencial, el absoluto conocimiento del asegurado sobre las consecuencias jurídicas que se puedan derivar del cambio de régimen pensional, el cual ha de venir suministrado y garantizado por el agente adscrito al respectivo fondo, esto es, es de la propia esencia del acto de traslado, el suministro cabal y absoluto de toda la información, incluyendo el asesoramiento sobre todas las implicaciones pensionales y consecuencias que para el caso concreto pueden darse, ya que se trata de una decisión relevante de la cual depende el futuro pensional del asegurado.

Esto lleva a la Sala a advertir que las obligaciones de asesoría no fueron creadas por el Legislador a través de recientes normas, sino que desde la propia concepción dualista de dos regímenes pensionales a través de la Ley 100 de 1993, se establecieron como de su propia esencia.

Así, la asesoría a cargo de la administradora, se erige en una obligación insoslayable, teniendo en cuenta la trascendencia e importancia de los efectos económicos que puede representar una decisión de tal naturaleza.

En términos generales, es preciso referir que la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha venido desarrollando la tesis sobre la ineficacia del traslado entre regímenes pensionales, y a través de las sentencias SL 1452 del 3 de abril de 2019 y SL 1688 del 8 de mayo de 2019, ha consolidado su línea jurisprudencial, la cual venía desarrollándose –en su orden- a través de las Sentencias SL 31.989 del 8 de septiembre de 2008, SL 33.083 del 22 de noviembre de 2011, SL 46.922 del 3 de septiembre de 2014, SL 19.447 del 27 de septiembre de 2017, y SL 17.595 del 18 de octubre de 2017, decantando que el deber de información es ineludible; que este tema a nivel

procesal se rige por condiciones probatorias que le imponen a la respectiva administradora de pensiones acreditar en el juicio que en cada caso concreto sí adelantó la respectiva asesoría; que el primer acto de voluntad es el que se juzga como determinante para la producción de efectos jurídicos en el traslado de régimen pensional, sin que exista la posibilidad de saneamiento de la ineficacia, por asesorías posteriores que se hubieren brindado a los asegurados, después de haber tomado la decisión inicial; que la simple suscripción de un formulario de traslado no denota un proceso serio y cabal de asesoría; no es necesario ni que el asegurado se encuentra ad portas de consolidar el derecho pensional, ni que necesariamente tenga que tener el beneficio del régimen de transición, y; que la prescripción no opera en asuntos en los que se encuentra involucrada la formación del derecho a la pensión.

Es importante destacar que, el primer acto de voluntad que se juzga como determinante para la producción de efectos jurídicos en el traslado de régimen pensional, sin que exista la posibilidad de saneamiento de la ineficacia, por asesorías posteriores que se le brinden al asegurado, después de haber tomado la decisión inicial, o por el hecho de que el asegurado se haya trasladado incluso entre varias administradoras pertenecientes al régimen de ahorro individual con solidaridad, ya que *“la oportunidad de la información se juzga al momento del acto jurídico del traslado, no con posterioridad, por lo que un dato será relevante si es oportuno, es decir, si al momento en que se entrega brinda al destinatario su máximo de utilidad”* (Sentencia CSJ SL 1688 de mayo de 2019).

A partir de lo anterior, pasa a desatarse la alzada conforme al...

CASO CONCRETO

Sea lo primero reseñar, que, conforme a la prueba documental obrante en el expediente digital, se comprueba que el demandante ha realizado aportes en pensiones al régimen de prima media con prestación definida administrado por CAJANAL y el ISS hoy COLPENSIONES, desde 1983 al 14 de septiembre de 1994; y posteriormente se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad

a través de la AFP COLFONDOS el 24 de octubre de 1994, fondo privado donde se encuentra afiliado en la actualidad.

Es pertinente advertir que, si bien el a quo no ahondó en consideraciones respecto de la ineficacia del traslado de régimen pensional por cuanto indicó que Colfondos se allanó a las pretensiones de la demanda, acogiendo, por tanto, dicha pretensión, tal punto se estudiará en atención al grado jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones.

Ahora, como lo ha decantado pacíficamente la jurisprudencia del órgano de cierre (Sentencias SL 31.989 del 8 de septiembre de 2008, SL 33.083 del 22 de noviembre de 2011, SL 46.922 del 3 de septiembre de 2014, SL 19.447 del 27 de septiembre de 2017, y SL 17.595 del 18 de octubre de 2017), es claro que la firma del formulario de afiliación no es una prueba certera de que hubiere existido un verdadero cumplimiento por parte de los fondos privados. La simple firma del formulario por parte del asegurado no puede tenerse como una prueba de que se le haya informado a cabalidad de todos los pormenores que le implicaban el cambio de régimen, y por ello el acto jurídico terminó afectado en su eficacia.

Es importante destacar que el derecho a la libre elección de régimen pensional contenido en la Ley 100 de 1993 en el marco del derecho a la seguridad social no riñe con las disposiciones legales que contemplan la exigencia del formulario, debiéndose entender que, más allá de la documentación formal, existe un sustrato material directamente relacionado con los derechos fundamentales que exige que el asegurado tenga una completa asesoría en su proceso de traslado de régimen pensional, la cual coloca a la respectiva administradora en el pleno del cumplimiento de sus obligaciones profesionales en ese sentido, bajo la dinámica del *“buen consejo”*.

Ahora bien, el apoderado judicial de COLPENSIONES, argumenta en su escrito de alegatos de conclusión en sede de segunda instancia, que la AFP demandada cumplió con los requisitos de fondo y forma que se exigían para el

momento en que se produjo el traslado, es decir, con el deber de información y buen consejo.

Pues bien, para la Sala la Ley 100 de 1993 como norma especial que regula esta situación, es la que comprende las exigencias y condiciones de validez de las afiliaciones a las administradoras del régimen privado y la que impone el acompañamiento al asegurado, resaltándose además que las obligaciones de asesoría y acompañamiento siempre han existido desde que se crearon los dos regímenes pensionales en la Ley 100 de 1993, sin que pueda decirse que se estén haciendo retroactivas obligaciones que solo se hayan impuesto en recientes normas jurídicas.

Ahora bien, sostiene el apoderado judicial de COLPENSIONES que el traslado del demandante se dio de manera libre y voluntaria y sin la afectación de ningún vicio del consentimiento.

En relación con este disenso debe tenerse en cuenta que a pesar de que la solicitud de vinculación se encuentre signada por el afiliado, y allí se indique que la selección se produjo de manera libre, espontánea y sin presiones, si tal decisión no se adoptó con el pleno conocimiento de lo que ello entrañaba, no puede predicarse que la selección hubiere tenido tales características.

En consideración a lo expuesto, para este Colegiado, la ineficacia en la afiliación al RAIS del demandante, se configura, a raíz de la afiliación ausente de información por parte de la AFP, quien tampoco acreditó en los términos que determina el artículo 167 del C.G.P, haberle brindado al actor un acompañamiento suficiente en su proceso de afiliación.

Así las cosas, esta sala recalca la línea jurisprudencial de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al determinar que la ineficacia se presenta en el momento de la afiliación ausente de información, esto es, no nace a la vida jurídica, sin que importen las conductas posteriores, ya que el acto no alcanzó a producir efectos jurídicos.

En consecuencia, **se confirmará** la sentencia de primera instancia, al haber declarado la ineficacia del traslado del señor **RAMÓN EMILIO ACEVEDO CARDONA** dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad.

Bajo el anterior escenario, la situación pensional del demandante, retorna al mismo estado en que se encontraba antes de suscribir el acto ineficaz de traslado a la AFP COLFONDOS, esto es, se encuentra válidamente afiliado al RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA, administrado en la actualidad por COLPENSIONES.

El tema de las devoluciones económicas es pertinente revisarlo en virtud de la competencia en Grado Jurisdiccional de Consulta de que dispone este colegiado, que impone la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera de la entidad pública codemandada que será quien asuma las futuras prestaciones económicas de la seguridad social que deban pagársele al demandante.

Los efectos de la ineficacia se traducen en el hecho de que las cosas deban retornar al estado anterior, resultando intrascendente que el actor haya percibido unos rendimientos financieros a partir de la gestión administrativa de COLFONDOS, en tanto COLPENSIONES no tiene por qué ver diezmada la cotización, ya que los referidos descuentos también existen en el régimen de prima media con prestación definida, y no deben ser realizados por COLFONDOS, sino por COLPENSIONES, que es donde siempre ha permanecido afiliado el actor.

Al respecto, resulta oportuno citar el reciente criterio de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, quien, en sentencia del 29 de julio de 2020, SL 2877, Radicación 78.667, MP. Clara Cecilia Dueñas Quevedo, ha recordado que *“la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida...”*.

Es de tal relevancia el principio de sostenibilidad financiera y la importancia de que el mismo no se vea limitado por omitir ordenar retornar todos los descuentos que le hicieron a la cotización, que esta Sala advierte que la orden dada por la A quo **resulta suficiente**, como quiera que en el **numeral 2°** de la resolutive de la sentencia se ordenó a la **AFP COLFONDOS S.A.**, *“a que, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, traslade a ADMINISTRADORA COLOMBIA DE PENSIONES COLPENSIONES EICE, el valor de la cuenta de ahorro individual con los respectivos rendimientos financieros del señor RAMÓN EMILIO ACEVEDO CARDONA, de igual modo, el porcentaje correspondiente a los gastos de administración, las primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados. A la par se dispone que, al momento de cumplir la orden, los conceptos aparezcan discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifique”*

Por lo que se confirmará la sentencia de primera instancia en ese tópico.

PENSIÓN VEJEZ

Esta Sala confirmará la condena de la prestación económica, toda vez que al encontrarse el demandante válidamente afiliado al régimen de prima media con prestación definida administrado por COLPENSIONES sin solución de continuidad, y reunir los requisitos de causación relativos al cumplimiento de una edad, y una densidad mínima de cotizaciones, era deber del operador jurídico declarar probada la causación de este derecho, bajo la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, como efectivamente ocurrió.

Y es que de la prueba documental aportada con la demanda, concretamente, el documento de identidad del demandante, y la certificación emitida por el MINISTERIO DE HACIENDA PÚBLICA, que milita en el PDF 22 y la historia laboral expedida por la AFP COLFONDOS S.A., es evidente que el señor RAMÓN EMILIO ACEVEDO CARDONA, cuenta con 65 años de edad, lo anterior, por haber nacido el día 07 de enero de 1957 (PDF 02 folio 71), y tener en su haber más de 1.760 semanas cotizadas entre el tiempo de servicio público y privado (PDF 22 y PDF 02 folio 88 y ss), superando con creces la edad mínima

de 62 años hombre y 1.300 semanas cotizadas, satisfaciendo las exigencias legales.

“ARTÍCULO 33. REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE VEJEZ. <Artículo modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Para tener el derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:

1. <Ver Notas del Editor> Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si es hombre.

A partir del 1o. de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre.

2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.

A partir del 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1o. de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015.

(...)”

Ahora bien y en relación al DISFRUTE PENSIONAL, debe advertirse que la misma ley (arts. 13 y 35 del acuerdo 049 de 1990 integrados al régimen de prima media con prestación definida en virtud del art. 31 de la Ley 100 de 1993), tiene diferenciado los fenómenos jurídicos de la **causación** y el **disfrute** de la pensión, el primer de estos ocurre cuando el afiliado logra completar la edad pensional y la densidad mínima de cotizaciones, pero para comenzar a percibir el pago de su mesada pensional, este mismo afiliado debe acreditar la desafiliación o retiro del sistema general de pensiones, es decir, exteriorizar de manera inequívoca su deseo o intención de consolidar su status de pensionado, veamos:

“ARTÍCULO 13. CAUSACION Y DISFRUTE DE LA PENSION POR VEJEZ. La pensión de vejez se reconocerá a solicitud de parte interesada reunidos los requisitos mínimos establecidos en el artículo anterior, pero será necesaria su desafiliación al régimen para que se pueda entrar a disfrutar de la misma. Para su liquidación se tendrá en cuenta hasta la última semana efectivamente cotizada por este riesgo.”

“ARTÍCULO 35. FORMA DE PAGO DE LAS PENSIONES POR INVALIDEZ Y VEJEZ. Las pensiones del Seguro Social se pagarán por

mensualidades vencidas, previo el retiro del asegurado del servicio o del régimen, según el caso, para que pueda entrar a disfrutar de la pensión. El Instituto podrá exigir cuando lo estime conveniente, la comprobación de la supervivencia del pensionado, como condición para el pago de la pensión, cuando tal pago se efectúe por interpuesta persona”.

Ahora bien, y dado que en el caso en concreto no existe certeza de la fecha de desafiliación del demandante al sistema general de pensiones, como bien lo concluyó la juez de primera instancia, ello impide la realización del cálculo relativo al promedio de lo cotizado por el actor, lo que frustra de suyo, proferir una condena en concreto, tal y como lo ordena el art. 283 del CGP.

Encontrándose también acertado el análisis jurídico realizado frente a la deducción del aporte obligatorio en salud, por tratarse de una obligación legal de todo pensionado contribuir con la financiación y sostenimiento del subsistema general de salud, conforme lo dispuesto en el art. 143 de la Ley 100 de 1993.

El apoderado judicial de COLPENSIONES, sostiene en su recurso de alzada que no es posible el pago de la pensión al demandante, pues la entidad no cuenta con la totalidad de los dineros que conforman la prestación económica reconocida al actor y, que la sentencia de primera instancia, no se encuentra ejecutoriada.

Ha de indicarse que en la sentencia se CONDENÓ “a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES EICE, a reconocer y pagar al señor RAMÓN EMILIO ACEVEDO CARDONA, la pensión de vejez. Advirtiéndose que quedará en cabeza de la ACP COLPENSIONES realizar la correspondiente liquidación conforme lo establecen los arts. 21 y 34 de la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta para ello, la última fecha de cotización que certifique y la corrección de la historia laboral a que haya lugar.”

Al respecto la sala resalta que, le asiste razón al apoderado judicial de COLPENSIONES en el recurso de alzada, razón por la cual se ADICIONARÁ el **numeral quinto** de la sentencia, a fin de ordenar a **COLPENSIONES** que, una vez reciba los recursos de la AFP COLFONDOS, proceda, en el término de los 30 días siguientes, a la **consolidación de la historia laboral**, y posteriormente al estudio del derecho pensional, **con disfrute a partir del momento en que se refleje**

novedad de retiro expreso o tácito del sistema pensional, bajo los parámetros del régimen general, contenidos en la Ley 100 de 1993 con las modificaciones de la Ley 797 de 2003, calculándose el IBL con las dos fórmulas que trae el artículo 21, y al más favorable entre toda la vida y los últimos 10 años aplicar la tasa de reemplazo que corresponda conforme al artículo 34 Ibídem.

Indexación del retroactivo pensional a cargo de Colpensiones

La apoderada judicial de la parte demandante en su recurso de alzada discrepa de la decisión adoptada por la Juez de primera instancia, quien se negó a conceder la indexación del retroactivo pensional, aduciendo que los mismos no habían sido incluidos en la fijación del litigio, sin embargo, a juicio de la togada procede la indexación al estar incluida en las pretensiones de la demanda y al tratarse de una actualización monetaria.

Efectivamente, esta sala corrobora que en el acápite de las pretensiones de la demanda se solicitó: *“SEXTO: como consecuencia de las anteriores declaraciones condenar a COLPENSIONES a reconocer y pagar indexación de las mesadas dejadas de percibir”*

En este punto cabe señalar, que, si bien que en la fijación del litigio nada se dijo en cuanto a la indexación, pues el mismos se circunscribió a: *“terminar si es procedente declarar la ineficacia de la afiliación del señor RAMÓN EMILIO ACEVEDO CARDONA al Régimen de Ahorro Individual con solidaridad... En caso de prosperar la ineficacia, se definirá si el demandante cumple con los requisitos para acceder a la pensión de vejez”*, lo cierto es que ello no es óbice para desconocer el petitum de la demanda.

En consideración con lo anterior, esta sala ADICIONARÁ la sentencia ordenando que en caso de que se haya generado algún retroactivo pensional en favor del demandante a título de mesadas pensionales causadas, COLPENSIONES lo pague de forma indexada, liquidándolo desde la fecha del retiro definitivo del servicio del actor y hasta el momento en que se produzca su pago efectivo, pues se requiere de un mecanismo de actualización monetaria,

para evitar la pérdida del poder adquisitivo de las mesadas pensionales adeudadas, que se da por el simple transcurso del tiempo, hecho notorio que no requiere demostración alguna, y así lo ha entendido la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en reciente sentencia SL359-2021, donde conceptuó la procedencia de la indexación de las condenas sobre las cuales no se impusiera una sanción moratoria, veamos:

“...la indexación se erige como una garantía constitucional (art. 53 CP), que se materializa en el mantenimiento del poder adquisitivo constante de las pensiones, en relación con el índice de precios al consumidor certificado por el DANE. A su vez, el artículo 1626 del Código Civil preceptúa que «el pago efectivo es la prestación de lo que se debe», esto es, que la deuda debe cancelarse de manera total e íntegra a la luz de lo previsto en el artículo 1646 ibidem. De ahí que, si la AFP no paga oportunamente la prestación causada en favor del afiliado, pensionado o beneficiario, tiene la obligación de indexarla como único conducto para cumplir con los mencionados estándares de totalidad e integralidad del pago. Por tal motivo, es incompleto el pago realizado sin el referido ajuste cuando el transcurso del tiempo devaluó el valor del crédito.

Ahora, la indexación no implica el incremento del valor de los créditos pensionales, ya que su función consiste únicamente en evitar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y la consecuente reducción del patrimonio de quien accede a la administración de justicia, causada por el transcurso del tiempo. Tampoco puede verse como parte de la mesada, puesto que no satisface necesidades sociales del pensionado, y menos como una sanción, ya que lejos de castigar al deudor, garantiza que los créditos pensionales no pierdan su valor real...”

En último lugar, la apoderada judicial de la parte actora, solicita que se imponga condena en costas procesales en primera instancia a la AFP COLFONDOS, argumentando que el mandatario de la AFP no tenía facultad expresa para allanarse, la demandada resultó vencida en el juicio, y el demandante ha esperado por más de cuatro años para que se haga efectiva la ineficacia del traslado del régimen pensional.

De entrada, advierte esta sala que le asiste razón a la recurrente cuando llama la atención a este colegiado sobre el hecho de que las costas procesales deben ser asumidas por la AFP COLFONDOS conforme procede a explicarse.

En relación con el allanamiento de la demanda, el artículo 98 del CGP determina: *“En la contestación o en cualquier momento anterior a la sentencia de primera instancia el demandado podrá allanarse expresamente a las pretensiones de la demanda reconociendo sus fundamentos de hecho, caso en el cual se procederá a dictar sentencia de conformidad con lo pedido. Sin embargo, el juez podrá rechazar el allanamiento y decretar pruebas de oficio cuando advierta fraude, colusión o cualquier otra situación similar...”*

En armonía con la anterior disposición, el numeral 4º y 6º del artículo 99 ibídem, dispone que el allanamiento será ineficaz: *“cuando se haga por medio de apoderado y éste carezca de facultad para allanarse”* 6. *Cuando habiendo litisconsorcio necesario no provenga de todos los demandados”*

En el asunto en concreto, la AFP COLFONDOS, presentó escrito a través de su apoderado judicial DR. JOHN WALTER BUITRAGO PERALTA T.P. No. 267.511 visible en el PDF 04, en el cual se expresa: *“manifiesto por medio del presente escrito que, mi representada se ALLANA a las pretensiones encaminadas a que se declare la nulidad y/o ineficacia del traslado de la parte demandante a COLFONDOS S.A, en atención al artículo 98 del Código General del Proceso, aplicable por remisión analógica del artículo 145 del C.P.T y de la S.S.”*

Con el escrito de allanamiento se adjuntó el certificado de existencia y representación legal de la AFP COLFONDOS que milita en el PDF 14 del expediente mediante el cual se coteja que mediante la escritura pública 584 de la notaria 25 de Bogotá del 13 de marzo de 2017, se otorgó poder general al doctor BUITRAGO PERALTA.

Ahora, en los procesos en que se solicita la ineficacia de la afiliación al RAIS por falta de una debida y oportuna información por parte de la AFP correspondiente, la normatividad que le da soporte a la misma exige perentoriamente la presencia no solo de la administradora responsable del traslado inicial, sino de todas aquellas que posteriormente intervinieron y por supuesto de la administradora del régimen público de pensiones, hoy COLPENSIONES, en tanto la afiliación que pudiera resultar eficaz es la que con ella existía.

Así las cosas, el allanamiento de COLFONDOS resulta ineficaz, en virtud del numeral 6 del artículo 99 arriba descrito; por cuanto **COLFONDOS S.A.** y **COLPENSIONES** integran de manera sustancial una unidad inescindible respecto del traslado de régimen en debate, conforme bien lo ha indicado la sentencia CSJ SL3202-2021².

Aunado a lo anterior, para la Sala lo que se demostró en el sub lite, es que fue la indebida asesoría pensional recibida por el demandante, la que dio lugar a la ineficacia, y dado que esta misma administradora resultó vencida en juicio, pese a no haberse opuesto a las pretensiones de la demanda, de tal suerte que en dicho caso si resulta pertinente emitir condena en costas, acudiendo al criterio objetivo previsto en el art. 365 del CGP que determina que “*Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso*”, por lo que se revocará la decisión para en su lugar ordenar imponer costas en la primera instancia. Las agencias en derecho en esa instancia deberán ser fijadas por el juzgado de origen en la oportunidad procesal correspondiente.

COSTAS PROCESALES DE SEGUNDA INSTANCIA

Sin lugar a condena en costas en esta instancia, como quiera que se acogen las suplicas formuladas en los recursos de apelación.

² Pues bien, de conformidad con el artículo 99 del CGP, el allanamiento será ineficaz, entre otros, en los casos señalados en los numerales: «5. Cuando la sentencia deba producir efectos de cosa juzgada respecto de terceros» y, «6. Cuando habiendo litisconsorcio necesario, no provenga de todos los demandados»

Ya se advirtió que por pasiva había un número plural de demandados, esto es Colfondos SA y Colpensiones, por lo que resta determinar la naturaleza de su concurrencia al proceso al cual fueron convocados, esto es, si así se hizo por simple economía procesal o porque la decisión judicial que se ha de tomar recae materialmente sobre un mismo acto o relación jurídica y sus efectos se extienden a todos los que en ella intervinieron.

Como el objeto de la litis es la solicitud de declaratoria de ineficacia del traslado del Régimen de Prima Media al de Ahorro Individual y el consecuente retorno de la afiliada al primero de los mencionados, no cabe ninguna duda de que se trata de una relación jurídica compleja que implicaría el movimiento financiero de una serie de recursos y, eventualmente, consecuencias tales como la responsabilidad en el reconocimiento y pago de la prestación pensional derivada del cubrimiento de los riesgos de IVM y el haz normativo que le sería aplicable.

En ese horizonte, cualquier decisión que se llegare a tomar, sin hesitación ninguna, afecta al conjunto de demandados, de tal suerte que no es posible escindir ese vínculo, dada la naturaleza de las relaciones que lo componen. Así, se trata entonces de uno de aquellos litisconsorcios conocidos como necesarios y, por ende, la propuesta de allanamiento en el proceso sólo era viable si los dos demandados hacían causa común en ella, lo cual en el presente caso no ocurrió.

VIII. - DECISIÓN.

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: ADICIONAR el numeral 5º de la parte resolutive de la sentencia de primera instancia, a efectos de ordenar a **COLPENSIONES**, que una vez reciba los recursos de la AFP COLFONDOS, proceda, en el término de los 30 días siguientes, a la **consolidación de la historia laboral**, y posteriormente al estudio del derecho pensional del demandante, **con disfrute a partir del momento en que se refleje novedad de retiro expreso o tácito del sistema pensional**, bajo los parámetros del régimen general, contenidos en la Ley 100 de 1993 con las modificaciones de la Ley 797 de 2003, calculándose el IBL con las dos fórmulas que trae el artículo 21, y al más favorable entre toda la vida y los últimos 10 años aplicar la tasa de reemplazo que corresponda conforme al artículo 34 Ibídem, por lo señalado en la parte motiva.

ADICIONAR el referido numeral 5º de la parte resolutive de la sentencia de primera instancia, a efectos de que **COLPENSIONES**, en caso de que se genere algún retroactivo pensional, en favor del demandante **RAMÓN EMILIO ACEVEDO CARDONA**, a título de mesadas pensionales causadas, lo pague de forma indexada, liquidándolo desde la fecha del retiro definitivo del servicio, expreso o tácito, hasta el pago total de la obligación.

SEGUNDO: REVOCAR el numeral 9º de la parte resolutive de la sentencia de primera instancia, a efectos de imponer costas procesales en el trámite de primera instancia a la AFP COLFONDOS. Las agencias en derecho en esa instancia deberán ser fijadas por el juzgado de origen en la oportunidad procesal correspondiente.

TERCERO: CONFIRMAR dicha sentencia en todo lo demás, de conformidad a lo expuesto.

CUARTO: Sin costas en la segunda instancia, por lo expuesto en la parte motiva.

QUINTO: En su oportunidad procesal, devuélvase el expediente al juzgado de origen.

SEXTO: SE ORDENA la notificación por **EDICTO** de esta providencia, que se fijará por secretaría por el término de un día, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

Los magistrados


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado


LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL
Magistrada